

Los cambios discursivos sobre el conflicto colombiano en la posguerra fría: su impacto en la actuación de los actores internacionales y locales

Erika Maria Rodríguez Pinzón (Universidad Nacional de Colombia).

Resumen

El conflicto colombiano ha nacido y evolucionado a raíz de la precariedad del Estado Nación, en este estudio se intenta entender como a través del tiempo los gobiernos colombianos han enfrentado el conflicto no en sus verdaderas dimensiones sociales y políticas, sino a través de los discursos de seguridad internacionales, esta forma de enfrentar el conflicto ha agudizado los problemas y ha sido uno de los factores que ha impedido una verdadera superación del mismo.

Palabras clave

Colombia, Conflicto, Comunismo, Narcotráfico, Terrorismo

Introducción

El caso colombiano resulta de gran interés dada su transversalidad temporal entre los diferentes marcos normativos internacionales, que lo han insertado como parte de la cruzada anticomunista, como prioridad en la lucha contra el narcotráfico y actualmente como una amenaza de carácter terrorista, que conlleva a unas políticas de manejo interno de la situación que desgastan en muchos lugares del país las ya precarias estructuras de participación política y del estado de derecho.

Hay circunstancias estructurales que determinan las características de los procesos violentos por los que ha pasado Colombia. Reconocemos que el conflicto tiene causas internas sobre las que han actuado los diferentes procesos que se gestan en el marco internacional dominante.

Para iniciar este trabajo y justificar sus planteamientos es necesario aclarar las causas “objetivas” a las que obedece el conflicto. El estudio de las causas del conflicto nos permitirá entender como los sucesivos gobiernos colombianos, han asimilado discursos de seguridad internacionales para entender y enfrentar el conflicto armado con una amplia tendencia a la militarización del problema, desconociendo las raíces sociales y políticas que sustentan la contienda entre gobierno, guerrillas y paramilitares.

Enseguida repasaremos los discursos de los que a lo largo de los últimos cincuenta años se ha valido el gobierno colombiano para enfrentar la violencia política y el conflicto interno. Primero el discurso de la contención anticomunista, después el de la reducción de los conflictos a sus medios de financiación, es decir el de la política antinarcóticos y, por último y desde hace poco tiempo, el discurso de la seguridad antiterrorista. Teniendo este último como característica especial que se ha negado la existencia de un conflicto interno en Colombia. A continuación analizaremos la evolución histórica de estas tres etapas haciendo énfasis en los discursos de la posguerra fría.

Las causas del conflicto

El conflicto, con los actores que conocemos hoy, se inicia durante el periodo denominado como “Frente Nacional” un acuerdo entre los dos partidos políticos tradicionales (Conservador y Liberal) que tenía como fin la culminación del proceso de violencia sectaria entre seguidores de los partidos que marcó los años 50 y se conoce como “la violencia”. El Frente Nacional acordó la repartición del poder entre los dos partidos y la alternancia en la presidencia, a su vez suprimió las posibilidades políticas para la oposición

política. La democracia restringida, como se suele llamar a este modelo, es una de las más citadas causas del conflicto.

Asumir la explicación de las restricciones democráticas como causante del conflicto deja de lado aspectos importantes que han determinado la evolución del conflicto a través del tiempo, que vinculan las diferentes violencias políticas que se han sucedido en Colombia desde el siglo XIX y se entienden mejor si se ve en todas ellas que lo que ha prevalecido es la “precariedad del Estado Nación (Pecaut, 1991).

Basándonos en los trabajos de Daniel Pecaut encontramos que las características de la precariedad del Estado Nación se hacen visibles en varios aspectos. En primer lugar, el Estado colombiano es incapaz de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional. A esta incapacidad se suma el hecho de que desde la colonia los problemas de la propiedad agraria en Colombia han sido débilmente resueltos, cuando no agudizados, por las coyunturas que producen las bonanzas económicas emergentes, como las del caucho, el café, o la coca. Se genera una situación en la que las crecientes fronteras de colonización geográfica en las que se producen estos cultivos de alto rendimiento son a su vez fronteras de la marginalidad social y política.

La colonización de frontera es la característica más habitual de los procesos de población y expansión geográfica en el país, una continua expulsión de campesinos desposeídos hacia las fronteras con la selva donde era mínima la presencia de las instituciones reguladoras del Estado central y la relación con el conjunto de la sociedad y la economía nacionales (González, 2004). En las zonas en las que el Estado no llega la organización social y el ejercicio del poder han sido, con creciente frecuencia en las últimas décadas, tomados por grupos guerrilleros o paramilitares. Estos grupos no solo ejercen el control militar, sino que también resuelven problemas de la comunidad, se encargan de la justicia, del cobro de impuesto e incluso de gestionar proyectos productivos de cooperativas civiles.

El siguiente aspecto de la debilidad del Estado Nación es el que prevaleció durante las guerras civiles del siglo XIX y la violencia sectaria de la primera mitad del XX como principal detonante y elemento articulador. Los partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) definen cada uno por su cuenta el contenido de las identidades colectivas. “No queda, en verdad, lugar ni para una imagen de Nación unificada, ni para un Estado independiente de los partidos” (Pecaut, 1991, 2). Pese a que con la entrada en vigor de la constitución de 1991, se reactivó la entrada efectiva de agrupaciones políticas diferentes de los partidos tradicionales, y que algunas de estas agrupaciones no tradicionales, como en los noventa el M19 o en la actualidad el Polo Democrático, han obtenido buenos resultados electorales, no se ha logrado consolidar un cambio en el modelo de partidos ni en la representatividad del sistema político. Si no es la división sectaria, es la apatía política la principal característica de los ciudadanos del país. La apatía ante una democracia que se reduce a la elección de cargos públicos pero no a la construcción de un Estado garante de los derechos sociales, el cual es el siguiente aspecto a analizar.

En un Estado que no se ha constituido en representante de los intereses sociales, los diferentes gobiernos han venido aplazando a lo largo de la historia las reformas sociales o éstas son sumamente lentas (Palacios, 1994, 29). El Estado además no ha incluido de una forma sólida e igualitaria los intereses de los sindicatos o grupos productivos, que o bien han sido cooptados por el partido de turno en el poder, o bien han dejado sus intereses, al igual que la mayoría de los colectivos sociales, en manos de poderes clientelistas que de manera personal resuelven necesidades básicas y gestionan políticas sociales en concordancia con sus intereses electorales.

Por último tenemos que las élites económicas rechazan la gestión estatal. En el centro del espacio político hay una dirigencia política y una elite económica que mantienen cada una su poder, se producen los vínculos de amistad, de clientela y relaciones familiares que impiden o limitan los conflictos entre la dirigencia política y las élites pero entre las cuales, se rechaza el intervencionismo. Es decir un Estado que es débil en su tarea de garantizar los beneficios sociales sumados a un alto nivel de incertidumbre, hacen del liberalismo el sistema más eficiente para las élites económicas.

Pero si las elite económica rechaza la intervención estatal y mantiene su independencia de la estructura política es también por que en Colombia, y a diferencia del resto de América Latina, “las élites están fragmentadas, tienen poca base social y no tienen conciencia de que su papel es dirigir una nación” (PNUD, 2003, 32), Marco Palacios, tal como lo cita el Informe Nacional de Derechos Humanos (INDH) del 2003, aduce que “lo que diferencia a nuestro país de otros no es la exclusión como tal o la inseguridad ciudadana en las grandes ciudades y en los campos, o la desigualdad social creciente, sino la ausencia de

una clase dirigente capaz de gobernar el Estado, de tramitar los complejos procesos de construcción de ciudadanía y de dar curso al sentimiento de que todos somos colombianos”. Esto explica que naciones latinoamericanas con mayores grados de pobreza, inseguridad creciente y amplias tensiones étnicas no presenten conflictos tan agudos y persistentes como el colombiano.

Siguiendo con el INDH, las características de la incapacidad de las élites colombianas para gobernar se resumen en: falta de visión a largo plazo, poco sentido de lo público, desentendimiento de los problemas del país y evasión de los costos de solucionarlos, la exclusión social y económica de una gran parte de la población (marginalización) y la percepción de que los marginados y sus problemas son ajenos a ellas, que es otra realidad que perciben como “un mundo raro, primitivo, inferior y amenazante que nos lleno de problemas y que debe someterse a disciplina”. Esta percepción ha hecho que la insurgencia sea entendida y enfrentada como un problema de orden público dejando su resolución en manos de militares y no de políticos. “Esta visión del conflicto como asunto criminal y periférico se mantuvo intacta durante mucho tiempo y aun predomina en la actitud del Estado y de las élites” (PNUD, 2003, 37-39).

Resumiendo en la precariedad del Estado Nación las causas del conflicto colombiano, es necesario aclarar que esta precariedad es causa de otra característica, que ha acompañado junto con la violencia la historia colombiana reciente, “la estabilidad del sistema”. Aunque de entrada resulta confusa, la afirmación encuentra sentido en que “la precariedad del Estado Nacional favorece las formas democráticas de muchas maneras. Priva a los militares o a las corrientes autoritarias civiles de un punto de apoyo y dificulta el desarrollo del populismo político, ...impide igualmente la tentación del populismo económico ... nada que ver con las doctrinas voluntaristas y con las reacciones políticas que acompañan su crítica ... el ejecutivo esta expuesto a los vetos del congreso y de la Corte suprema de justicia y que los tecnócratas no tienen sino un margen de acción restringida” (Pecaut, 1991) estos factores no hacen que sea un buen Estado, pero mantienen una estabilidad que es reconocida internacionalmente, no por la estabilidad del desarrollo claro esta, sino por la ausencia de dictaduras y golpes de estado frecuentes en el conjunto de las naciones latinoamericanas.

Dos aspectos se unen aquí para explicar la importancia que los discursos de seguridad dominantes han tenido en Colombia. Primero la estabilidad del régimen que lo mantuvo durante mucho tiempo como un modelo dentro del subcontinente, haciendo del país un aliado confiable de las políticas de seguridad norteamericanas durante la guerra fría e incluso al terminar esta. En segundo lugar la visión de las élites colombianas a cerca del conflicto que al considerarlo ajeno a su realidad inmediata, incapaces de generar un compromiso de unidad y crecimiento nacional y poco dispuestas a pagar el costo de los problemas sociales, han optado por enfrentar el conflicto sin afrontarlo, haciendo uso de lógicas de comprensión y contención del problema importadas de las políticas de seguridad de los Estados Unidos.

El Conflicto Colombiano Durante la Guerra Fría, El Discurso de la Contención del Comunismo

Para efectos de este trabajo iniciaremos nuestra exposición del conflicto colombiano en el periodo de “La Violencia” que, si bien, no se corresponde con el inicio formal del actual conflicto por cuanto los actores de este se consolidaran durante los años sesenta y setenta, si permite entender como han evolucionado las formas de enfrentar las sucesivas violencias políticas de Colombia y en especial la importancia que en ellas ha tenido el marco normativo internacional estadounidense.

“La Violencia” que se fecha entre 1948 y 1958 es un periodo histórico marcado por la violencia ejercida entre seguidores del partido conservador organizados en grupos armados al margen de las fuerzas de seguridad y liberales organizados en autodefensas.

El inicio de este periodo se corresponde con el “bogotazo”, una sesión de desordenes populares que siguieron al asesinato de un popular líder político, y el final se marca con el acuerdo del Frente Nacional. Si bien la época, se caracteriza por la violencia sectaria ejercida en virtud de lealtades hacia los partidos políticos tradicionales y que la importancia del discurso comunista era aun incipiente, además de que sus cercanías con el liberalismo le daban poca autonomía organizativa, el gobierno colombiano se adhirió a la versión de que el comunismo estaría detrás de los desordenes del orden público.

Otros gobiernos se sumaron también a la condena de los comunistas que estarían detrás de las revueltas que causaron incendios y saquearon comercios, pero que no cometieron actos contra embajadas, bancos,

fábricas o museos, hechos que podrían haber revelado un verdadero sentido “anti-sistema” detrás de las acciones (Gilhodes, 1985, 241).

“Haber dado la explicación de influencia comunista a los levantamientos del 11 de abril, permitió darle una dimensión real a la amenaza comunista en América Latina y demostrar la necesidad de adscribir una política continental de lucha anticomunista. Se asumió “en consonancia con los objetivos geopolíticos de EEUU” que la URSS y el comunismo representaba una grave amenaza para la civilización occidental y cristiana. Se desarrolló un sistema de alianzas interestatales anticomunistas acordes con la doctrina Truman y articuladas a través del sistema panamericano, de la OEA, del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) y la Alianza para el Progreso lanzada en 1961. “Además de la ruptura de relaciones diplomáticas con la URSS Colombia sería el único país de la región en enviar tropas a la guerra de Corea, uno de los que mas asistencia recibió de la “alianza para el progreso” y uno de los que rompió relaciones con Cuba cuando triunfo la revolución liderada por Fidel Castro” (Ramírez S. 2004, 183).

La amenaza del enemigo interno del modelo anticomunista, determinaría la forma en que se llevaría a cabo en adelante la política de seguridad del país, aún cuando la violencia rampante de la época se construía sobre el bipartidismo y las estructuras de la propiedad y del poder en las regiones. El comunismo como amenaza resulto una forma de desplazar el discurso que tendría que incidir en criticar a la estructura partidista colombiana y sus métodos y a la vez le dio validez al discurso norteamericano sobre la amenaza comunista en los países latinoamericanos

Ya con la llegada al poder del Frente Nacional se resolvía el problema de la Violencia entre partidos por lo cual sus remanentes, es decir los grupos organizados armados que continuaban operando ya sin filiación hacia ningún partido solo podían ser delincuentes o como se les llamo entonces “bandoleros”. Si bien era cierto que el uso de la violencia para conseguir intereses egoístas prevalecía en muchos de estos grupos, cosa que suele ocurrir al terminar un conflicto debido al desajuste de las estructuras de control social. Había también remanentes de las autodefensas campesinas, antaño liberales, que permanecían activas frente a la creciente inseguridad y los frecuentes asesinatos de líderes liberales desmovilizados de los grupos armados. Estos grupos serían la base fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En sus inicios las FARC fueron un grupo espontáneo de autodefensa campesina que pasaron a ser un movimiento agrarista en busca de una ideología política que posteriormente se convirtió en un instrumento estratégico del Partido Comunista para la toma del poder mediante la combinación de todas las formas de lucha y que finalmente adquirió plena autonomía política, financiera y militar para constituirse en una organización con propios y bien delimitados objetivos en cada uno de estos campos (Rangel, 1997, 2)

Surgieron también otros grupos guerrilleros, que si bien nacían a partir de la ideología de la revolución como único medio de transformación social altamente influenciados por la experiencia Cubana, respondían a la existencia de tensiones sociales. Estos grupos vincularon a sectores que mantenían relaciones conflictivas con el sistema tales como campesinos pobres, indígenas, sindicalistas, obreros de zonas de macro-explotación comercial agrícola y estudiantes. Entre ellos sobresalen el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), el Ejercito Popular de Liberación (EPL) y algunos años después el Movimiento 19 de Abril (M19).

“El clima ideológico reinante en el mundo generó en Colombia una doble dinámica contradictoria por un lado Moscú la Habana y Pekín le dieron a las guerrillas colombianas su primera inspiración política y soporte ideológico. Algunas veces, los distintos centros de poder del denominado campo socialista invocados por las guerrillas colombianas (FARC prosoviéticas, ELN procastrista) les brindaron apoyo logístico y espacio de entrenamiento y recuperación fuera de los escenarios de combate ...por otro lado el anticomunismo patrocinado por Washington en occidente estimuló la adopción indiscriminada de su ideología y su nociva mezcla con intereses internosel bipartidismo instaurado por el frente nacional se sirvió del beligerante anticomunismo internacional para preservar su monopolio político ...sus gobiernos no tuvieron reparo en que las fuerzas de armadas se formaran en la perspectiva de la seguridad nacional, según la cual los conflictos sociales internos eran producto exclusivo de la penetración del comunismo internacional” (Ramírez, 2004, 183).

El conflicto quedó inscrito desde antes de asumir las ideologías del comunismo (desde la época de “la violencia”) y sin que ellas fueran el principal motivo de la existencia de grupos armados antiestatales, en una lógica de guerra fría y anticomunismo que se valía de la importancia que Washington le daba al tema, de la posición geoestratégica de Colombia y de la cercanía de las élites colombianas al gobierno estadounidense.

El final de la guerra fría no representó el final de las guerrillas que habían nacido y crecido ligadas ideológicamente a la disputa bipolar, los discursos agraristas y antiimperialistas se mantendrían vivos durante la transición hacia una nueva configuración ideológica y hacia un nuevo sistema de financiamiento. Las realidades sociales en las que las guerrillas evolucionaron tampoco habían cambiado radicalmente como para que perdieran su base de sustento, pese a que sus acciones ganaban fuerza bélica muchas veces en contra de la población misma.

En el caso de las FARC, desde antes de finalizar la guerra fría, realizaron múltiples esfuerzos para sustituir los apoyos del mundo socialista, que paulatinamente se iban reduciendo. En los años noventa, desplegaron una activa diplomacia dirigida fundamentalmente a buscar reconocimiento internacional como parte beligerante en el conflicto, puesto que ya el problema financiero parecía resuelto mediante el recurso de la extorsión, el secuestro, los dineros derivados de su creciente relación con las drogas ilegales. (Ramírez, 2004, 215)

EL final de la Guerra fría y la narcotización de las relaciones entre EEUU y Colombia

Con el final de la guerra fría el discurso anticomunista y el mismo discurso comunista perdían vigencia, paulatinamente los dos discursos fueron cambiando y consigo cambió la forma en la que se entiende el conflicto. Por el lado de la guerrilla, es importante mencionar que para 1991 solo subsistían dos de los grupos mayoritarios, las FARC y el ELN, los otros se habían desmovilizado y en el caso del M19 se habían integrado exitosamente a la vida política. Los grupos que siguen activos mantuvieron un discurso que ha contenido siempre mas elementos de una lucha por la propiedad de la tierra y el antiimperialismo que elementos comunistas, la nueva orientación ideológica se construiría alrededor del bolivarianismo¹⁵⁶. De todas formas es importante apuntar que frente a un oponente que siempre les ha tratado como un problema de seguridad y nunca como un verdadero oponente político, las guerrillas también han privilegiado la lucha militar frente a la ideología en especial las FARC, han restringido su acción política y han reforzado la lucha militar bajo varias estrategias. El ELN por su parte ha continuado su acción contra objetivos estratégicos y de referencia en sus zonas de acción, en especial los oleoductos.

Desde mediados de los años sesenta venía presentándose en Colombia el fenómeno de la bonanza económica producto de la siembra de marihuana y de su exportación hacia los EEUU. Si bien ya el presidente Nixon había anunciado el problema de seguridad, que este tráfico suponía para los EEUU, será solo hacia el final de la administración Reagan cuando el tema se convierta en una de las prioridades de la política de seguridad de EEUU. Para entonces, la marihuana se había remplazado por coca de la que se extrae la “cocaína”, y unos años después se sumaría el cultivo de amapolas para producir “heroína”.

Mientras se mantenía la estrategia anticomunista en toda América Latina evolucionó un poder emergente, los narcotraficantes, que incluso fueron en algunas ocasiones aliados de la lucha anticomunista. Este poder emergente se convertiría en una amenaza de seguridad que con el tiempo se mostraría más compleja y peligrosa que el comunismo. Los narcotraficantes en su expansión se habían valido de la debilidad de la presencia estatal y la fractura de las clases dirigentes en poderes locales.

La lucha contra la droga, ha sido determinada por Estado Unidos, bajo un enfoque de control de la producción. Así los esfuerzos y los discursos se concentran en condenar la siembra, producción y exportación de drogas, pese a que las dos primeras son las etapas menos rentables del ciclo de producción y comercialización de las drogas ilícitas. La lucha contra las drogas como prioridad internacional de seguridad ha llevado a que las relaciones exteriores de los países productores con los países desarrollados en especial Europa y EEUU, se “narcoticen”. El área andina ha sido el foco de ingentes esfuerzos por acabar con la siembra de coca y amapola. Los gobiernos del área realizan grandes esfuerzos por mostrar

¹⁵⁶ Sobre el mito de los ideales de Simón Bolívar. Esta adhesión ideológica queda registrada en el programa guerrillero de 1993.

resultados en la erradicación de la droga, los buenos resultados les garantizan la consecución y mantenimiento de ayudas económicas y militares.

La corresponsabilidad en materia de drogas ilícitas, entre países productores y grandes consumidores, ha generado tratados que les dan ventajas comerciales a los países que luchan exitosamente contra la droga. Pero la corresponsabilidad que se enfoca sobre un sistema de “garrote y zanahoria” con los países productores, no tiene una contraparte en un sistema de verificación de los esfuerzos de los países consumidores, en la desestimulación de la demanda y el control de la comercialización minorista. A este enfoque de represión de la oferta más que de la demanda se suma como una constante el uso de medios masivos de destrucción de cultivos como las fumigaciones que tienen efectos adversos ecológicos y sociales.

Los Gobiernos andinos y en especial el colombiano no solo se han aplicado en las medidas de represión de la producción de narcóticos, sino que además han presionado para que Washington mantenga su atención sobre el fenómeno y continúe destinando recursos para la lucha antidrogas.

La importancia de la lucha antinarcóticos es mayor desde que el narcotráfico se ligó a la financiación del conflicto colombiano. Paralelamente se incrementaron las violaciones del DIH y el conflicto fue generando impactos muy negativos sobre los DDHH, las migraciones, el desplazamiento y el medio ambiente, “el conflicto empezó a aparecer en las agendas internacionales justo en un momento en el que todos estos asuntos se convertían en ejes centrales de la agenda global y cuando las fronteras entre los asuntos estrictamente domésticos y los temas propiamente internacionales tendían a desdibujarse” . (Ramírez, 2004, 193)

El narcotráfico intentó tempranamente penetrar las esferas de la política, pero no logró la consolidación de su estatus quo como poder legítimo, lo que implicaba la legalización de la droga o de los capitales obtenidos de su comercio. Tampoco logró presionar al gobierno para acabar con la que se convirtió en la principal arma de lucha contra el narcotráfico, “la extradición”. Lo que si lograron los narcotraficantes fue la penetración de los poderes locales, dada la fragmentación de las élites y del poder en Colombia. Tanto los narcotraficantes como los jefes paramilitares se han convertido en poderes cada vez más importantes a nivel local y regional.

Los narcotraficantes mantenían una difícil relación con las guerrillas. En algunas zonas había una relación simbiótica en la que las guerrillas prestaban seguridad a las plantaciones a cambio de algunos impuestos, y en otras la relación era de confrontación abierta lo que llevó a los narcotraficantes a constituir grupos paramilitares que acabaran con el control guerrillero local. En esta tarea mas de una vez se vieron ayudados por hacendados, cansados de los excesos de los grupos guerrilleros (secuestros, robos de ganado, cobro de impuestos) y de los representantes locales de las Fuerzas Militares aun interesados en la persecución de “comunistas”. La lucha con las guerrillas llevó también a la persecución de todos los cuadros políticos de estas en las ciudades y ha abierto actualmente una lucha por el control de los cultivos y “corredores” de la droga que ha profundizado la violencia y en especial que ha dejado a la población de algunas regiones expuestas a toda clase de atropellos y violaciones de los Derechos Humanos.

La incapacidad de las élites y en especial su particular visión, o falta de ella, del conflicto es uno de los elementos explicativos mas importantes, tanto de la forma en que se ha enfrentado el conflicto, como de la evolución de otro actor determinante de la violencia de las ultimas décadas, el paramilitarismo. En este caso el gobierno ha actuado por dos causas, por acción o por omisión (García-Peña, 2005, 59), la primera porque los antecedentes del paramilitarismo actual se remontan a los grupos constituidos legalmente¹⁵⁷ en virtud de la lucha anticomunista y porque pese a su ilegalización los nexos entre élites regionales, paramilitares y ejército permanecen activos. Por omisión, porque las élites en uso de su habitual desentendimiento han permitido la degradación creciente de los poderes locales y regionales en los que actores emergentes como los narcotraficantes han comenzado a ejercer el poder y porque no ha corregido del todo y con la suficiente dureza los vínculos entre el sistema militar y el “parasistema”.

Ahora bien “la percepción de que el narcotráfico es la mayor amenaza para la estabilidad de las democracias latinoamericanas y de la integridad de las sociedad y del Estado norteamericano, llevó con fundamentos empíricos mas bien frágiles a la ideología de la “narcosubversión”, así se empezó a poner en un mismo saco a los empresarios de la guerra y a los guerrilleros el discurso de la salud publica sobre la

¹⁵⁷ A través de la ley 48 de 1968 e ilegalizados con el Decreto N°1194 de 1989

epidemia de las drogas cedió su lugar de privilegio a un discurso eminentemente político de seguridad nacional en el que se hablaba de la cocaína como de “misiles” enviados contra los EEUU desde los países andinos. De esta manera, se dio al traste con la distinción entre delincuentes políticos y delincuentes comunes, con lo cual se favoreció, sino la bandolerización de los primeros, por lo menos si la politización de los segundos” (Orozco, 1990, 43-44).

Los narcotraficantes se convirtieron en enemigos del estado y de Estados Unidos al igual que las guerrillas, aunque estos dos grupos estuviesen diametralmente opuestos, hasta aquí tenemos una parte la idea que baso el concepto de “narcosubversión” y ligado a este el de “narcoguerrillas”¹⁵⁸.

Es importante a esta altura del análisis resaltar que muchos estudios que se inscriben sobre la economía política del conflicto basan sus explicaciones sobre la presencia de los conflictos armados en ciertos países en la existencia de recursos que hagan posible financiar los grupos en armas y sus requerimientos. En este caso combatir el narcotráfico es una forma de combatir a los grupos subversivos, porque se supone que es su principal fuente de financiación. Si bien esto puede ser válido para los paramilitares, que han reconocido su activa participación del negocio, aunque no es su única renta, para las guerrillas esta actividad representa según advertían recientes informes gubernamentales solamente una parte de las rentas ya que los grupos guerrilleros obtienen también beneficios de la extorsión, el secuestro y el robo de ganado. Es posible comprender una estrategia tan importante y costosa como el denominado “Plan Colombia” propuesto y puesto en marcha por la administración de Andrés Pastrana (1998 – 2002), como una estrategia que intenta acabar con las fuentes de financiación del conflicto y que por ello era parte vital de la estrategia para alcanzar la superación del conflicto armado.

Al igual que el discurso anticomunista negó las condiciones objetivas del conflicto para en ese caso reducirlo a un problema de la inserción ideológica internacional, en este caso el discurso antinarcóticos lo redujeron a un problema de un interés individual por obtener recursos sin reconocer que más allá del interés egoísta de los cultivadores están las ingentes necesidades básicas por satisfacer y su exclusión de los sistemas económicos y productivos legales.

El problema real, el de la pobreza extrema del 64% de la población y la miseria del 8%, se minimiza ante el aplastante discurso de seguridad que permite a élites y gobierno asumir discursos morales sin fisura pero que dejan de lado una realidad social acuciante. Una realidad que no ha cambiado lo suficiente pese a los esfuerzos gubernamentales (hay que reconocer que los ha habido), porque no han variado las raíces estructurales de la problemática de la pobreza y la inequidad. Es decir, las que se hunden en la debilidad del Estado nación, en la marginalidad económica y social y en la falta de un interés nacional de reconstrucción de las estructuras de integración al sistema.

Estrategias como la sustitución de cultivos son muy relevantes en la solución social de los cultivos ilícitos, pero los programas llegan con lentitud y sucumben ante estrategias masivas como la fumigación con químicos y no pueden ofrecer muchas veces opciones realistas a los cultivadores y trabajadores de las plantaciones de la droga. Por otro lado la fumigación como estrategia de combate es un sistema muy cuestionable. En primer lugar plantea un problema medio ambiental, diversos informes se contradicen respecto a las consecuencias del glifosato sobre la salud humana y no se puede negar la grave alteración ecológica que provocan sobre especies animales y vegetales que conviven con las plantaciones de coca y amapola. Además las fumigaciones llevan a que los cultivadores se trasladen continuamente hacia zonas alejadas convirtiendo bosques y selvas en cultivos con todo el impacto que esto conlleva. Los resultados no son estables, hay una dinámica de traslado de cultivos entre los diferentes países andinos, que mantiene la oferta relativamente estable con lo cual los precios al consumidor final de la droga no se ven gravemente afectados.

Al igual que otros productos que generan grandes riquezas en lapsos de tiempo cortos, tal como ya había sucedido con el caucho y la quina o como paralelamente ocurrió con el tráfico de esmeraldas, la bonanza económica emergente producto del cultivo de narcóticos, afecta seriamente la estabilidad social. Especialmente cuando a la entrada sorpresiva de divisas en comunidades extremadamente pobres se le suma la incapacidad del Estado para controlar los poderes fácticos locales. Este ha sido el caso colombiano, la economía de la droga además de servir de financiamiento de los grupos armados no estatales, guerrillas y paramilitares, ha traído consigo altos niveles de violencia común. Sin la presencia

¹⁵⁸ termino acuñado por Lewis Tamb, Embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1983 y 1985

estatal, las zonas de bonanza económica emergente no regulada quedan a merced de los poderes locales, bien sean particulares o de grupos armados.

El proceso para ganar el dominio de una zona por cualquiera de estos actores pasa por el establecimiento de medidas de coerción impuestos por la fuerza o el terror. Al mismo tiempo los intereses privados llevan al uso de la fuerza y mientras no exista un poder que controle la zona la violencia se dispara. Cuando los poderes se consolidan la violencia disminuye aunque tiende al contagio de las zonas geográficas adyacentes.

El tema de las drogas y en especial el tema de la corresponsabilidad internacional en materia de estupefacientes, no puede ser reducido a un debate moral, conforme lo han planteado los Estados Unidos y los países aliados. La lucha centrada solo en la producción no es suficiente ni justa. Mientras el consumo se mantiene y persista la ilegalización, la producción mantendrá sus incentivos bien en los Andes, en Afganistán o en cualquier parte del mundo subdesarrollado. “La siembra de productos que generen ganancias rápidas encierra -otras realidades dramáticas... que tienen que ver con la defensa de sus ingresos y con el mejoramiento de sus precarias condiciones de vida. También con la lógica del capital y del mercado, que contribuye a la consolidación de estas economías de grandes beneficios.... El conjunto de necesidades biológicas y sociales lanza a estos sectores marginados de la economía a la orbita de la ilegalidad, con las alternativas de satisfacción rápida de cuanto el mercado siempre les negó” (Tovar, 1993; 6).

La droga y su represión vinieron a crear mas desorden y a debilitar mas el orden: riqueza fácil y corrupción por un lado y desvió de la poca capacidad de gobierno por otro (PNUD, 2003, 39) y además llevo a que los campesinos y colonos pobres además de marginalizados, fueran criminalizados, convirtiendo de nuevo la inequidad en un problema de seguridad.

Para concluir este apartado debemos decir que el narcotráfico, si bien es una amenaza real porque su influencia ha filtrado las estructuras políticas y tiene graves consecuencias ambientales y sociales, es solo una expresión más de una realidad que se caracteriza por la debilidad del Estado y la pobreza extrema de una gran parte de la población.

La prioridad de la contención del narcotráfico a nivel de la producción no ha logrado controlar el trafico, pero si ha profundizado los problemas sociales colombianos. La prioridad de seguridad internacional y su estrategia de combate, ha desviado los esfuerzos de nuevo hacia el control de uno solo de los problemas del conflicto colombiano y no hacia la superación de las causas objetivas de este.

El discurso de seguridad anti-terrorista

Durante la administración del presidente Pastrana (1998-2002) se llevó a cabo el proceso de diálogos mas largo y en el que el gobierno ha hecho mas concesiones a las FARC. Las negociaciones pese a lo prolongado del proceso no dieron frutos en parte por la falta de una agenda de diálogos que encausara el proceso y las prioridades de este, y en gran medida por la falta de compromiso de las FARC, que usaron la zona despejada de militares para adelantar el proceso, para retener secuestrados y cometieron varios asesinatos.

Las FARC fueron acusadas de la ruptura de los diálogos por la comunidad europea y por el grupo de países que habían trabajado como “facilitadores” del proceso de paz. Los EEUU por su parte habían permanecido al margen del proceso debido entre otras causas al asesinato de tres indigenistas americanos a manos de las FARC. El gobierno y los Estados Unidos de forma paralela al desarrollo de las conversaciones de paz, se habían comprometido en el plan Colombia.

La ruptura de los diálogos sumada a los múltiples ataques de los grupos no estatales en conflicto contra objetivos civiles y la nueva amenaza de seguridad internacional que habían puesto de manifiesto los atentados cometidos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, hicieron que el discurso de la lucha antiterrorista se convirtiera en la nueva estrategia central en el manejo del conflicto colombiano.

El Embajador de Colombia en Washington lo exponía en estos términos, “Colombia es el principal teatro de operaciones de los terroristas en el hemisferio occidental, bajo la falsa pretensión de una guerra civil, los grupos guerrilleros colombianos han devastado la nación con violencia financiada por los

consumidores de cocaína en los Estados Unidos. La administración Bush, apropiadamente, esta presionando en el congreso para expandir la política antinarcóticos hacia el fortalecimiento de la habilidad de Colombia de combatir el terror¹⁵⁹. El Embajador intentaba hacer un paralelo entre la amenaza de seguridad terrorista internacional y la gravedad de las acciones armadas guerrilleras en las que además había una buena parte de responsabilidad internacional.

La difícil situación que llevó al cierre del proceso de paz, con acciones que motivaron un amplio rechazo nacional e internacional, ratificó la política de adhesión al discurso internacional antiterrorista, lo que por supuesto no elimina la vigencia del problema del narcotráfico. “La política exterior estadounidense en virtud de sus nuevas prioridades de seguridad empezó a privilegiar la lucha antiterrorista, con lo cual otros muchos temas entre ellos las drogas, el tráfico de armas, el comercio, y la migración, empezaron a verse a través del lente del terrorismo. El gobierno colombiano podía armonizar con esta perspectiva la política exterior e interior poniendo ambas a girar alrededor de la guerra contra el terrorismo” (Tickner et al, 2004, 2).

La elección del presidente Uribe trajo consigo una posición mas fuerte aún del gobierno respecto a las guerrillas, el gobierno se ha esforzado en que la opinión pública e incluso la comunidad internacional reconozcan que en Colombia no hay un conflicto armado¹⁶⁰. El argumento del gobierno de Uribe que insiste en que no existe un conflicto armado, sino solo una amenaza terrorista, se sustenta en tres pilares. Ante todo Colombia es una democracia, no un régimen represivo por lo cual no existe una razón legítima para alzarse en armas. En segundo lugar la guerrilla ha perdido su base ideológica desde la caída del muro de Berlín y opera a la manera de las mafias organizadas mas que como revolucionarios, en tercer lugar, tiene como objetivo mas que todo a la población civil y no respeta las normas humanitarias. (Crisis Group, 2005, 25).

Si bien los argumentos de negación del conflicto armado, ganan peso ante la desmedida violencia de las acciones de las FARC, el ELN y de los paramilitares agrupados bajo las AUC, quienes parecen desdeñar el valor de la vida de los pueblos sobre el que fundamentan sus discursos. Es imposible desconocer, que tal como lo sostiene el Jefe de Operaciones para América Latina y el Caribe del CICR “A la luz del DIH, la situación existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional”, quien incluso añade que la existencia de actos de terrorismo “no modifica la calificación jurídica del conflicto”¹⁶¹.

Los argumentos del gobierno son cuestionables también a la luz de las causas que hemos venido analizando como responsables de la persistencia del conflicto colombiano. La democracia colombiana queda en entredicho frente a los graves problemas del Estado para representar efectivamente a toda la población y garantizar sus derechos, mientras que el presidente insiste en comparar la democracia colombiana con las Europeas y legitimar su discurso en esta comparación, los índices internacionales de posibilidad de colapso estatal acercan a Colombia más a los países africanos que a los europeos¹⁶².

“Con el fin de llamar la atención sobre la situación interna y de concretar apoyos Uribe ha exagerado de modo inconveniente la amenaza internacional que representa el conflicto colombiano” (Ramírez, 2004, 200) si bien la amenaza “terrorista” colombiana no afecta directamente a los EEUU ni a Europa, si es un discurso capaz de conmovir apoyos internacionales en un mundo sensibilizado por las acciones de los grupos extremistas, pero además es un discurso que ha logrado un altísimo nivel de aceptación al interior del país.

La amplia popularidad del presidente se explica en parte por que su discurso de “mano dura” satisface a un amplio sector de población que ha sentido las repercusiones terroristas del conflicto y que no encuentra una razón ideológica que justifique la falta de respeto por la vida que muestran los grupos no estatales en conflicto. Pero, por otro lado, la negación del conflicto armado ha dificultado las relaciones con comunidades que se encuentran cercadas por las presiones de los grupos en conflicto, zonas en las

¹⁵⁹ “Aiding Colombia”, Luis Alberto Moreno (Embajador de Colombia en EEUU); The New York Times

¹⁶⁰ “El gobierno busca sacar del lenguaje diplomático el termino conflicto armado” El Tiempo, Junio 13 de 2005

¹⁶¹ En Colombia sí hay un conflicto armado interno': Comité Internacional de la Cruz Roja; El Tiempo Mayo 4 de 2005

¹⁶² “El Estado fallido”, Pedro Medellín, en el Tiempo, Julio 5 de 2005

que el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y en las que la estrategia de represión de las guerrillas ha vulnerado los derechos de los pobladores.

Al cerrar las posibilidades de negociación con los grupos guerrilleros, si estos no dejan las armas, se ha empleado una presión militar sin antecedentes en el combate de los grupos guerrilleros. La estrategia militar de lucha contra las guerrillas en la política de Seguridad democrática y su versión militar, el Plan Patriota que ha desplazado 18000 soldados hacia el sur del país. Es un intento por asediar a los guerrilleros en sus zonas de resguardo, que ha sido acompañada por una serie de acciones cuestionables como la vinculación de jóvenes como “soldados campesinos”, la “red de informantes” y las detenciones masivas.

A la estrategia militar contra las guerrillas se le suma el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), agrupación que reúne la mayor parte de los grupos paramilitares que operan en el país, este proceso enmarcado legalmente por la “Ley de Justicia y Paz” ha sido fuertemente cuestionada por la ONU, muchas Organizaciones no Gubernamentales, los medios de comunicación de varios países e incluso por el Congreso de EEUU que no creen que asegure la reparación de las víctimas, la aplicación de penas justas para los crímenes de lesa humanidad cometidos y la desarticulación real de los grupos paramilitares.

Sin restar la importancia que merecen las dos primeras críticas, la última justifica una seria preocupación sobre las probabilidades de que los paramilitares mantengan el control de muchas zonas del país y no rompan sus lazos de coerción sobre las administraciones locales.

De persistir el poder paramilitar en muchas regiones del país la superación del conflicto es imposible, por que el poder de estos grupos armados no permiten que el estado de derecho retome el poder efectivo y el ejercicio de las garantías constitucionales para toda la población. Lo que si es claro es que la pronta desmovilización de las AUC, tiene especial relevancia para un gobierno que ha presionado una reforma constitucional en busca de la aprobación de la reelección presidencial inmediata que de aprobarse, dada la alta popularidad del presidente, la reactivación de la actividad armada de los subversivos, y el buen curso de las negociaciones con las AUC, augura que el presidente Uribe podría ganar con facilidad un segundo periodo presidencial en el que se consolidaran las estrategias puestas en marcha.

Es importante comprender que en este momento el cruce entre política interna y discurso de seguridad internacional gana una gran importancia, porque uno y otro se complementan.

La estabilidad de la política de Uribe, teniendo en cuenta lo cuestionable de sus estrategias, no necesariamente augura una efectiva superación del conflicto porque como en anteriores periodos históricos la contención militar sin una articulación agresiva de políticas sociales y de presencia Estatal dejan el camino abierto a la persistente violencia, mas aun cuando, como ya se afirmo, subsisten las incertidumbres sobre la verdadera desarticulación de los poderes locales que controlan los grupos paramilitares. La reducción de los conflictos a una de sus expresiones, el terrorismo, si bien es la más cruel de ellas, no resuelve la problemática que los mantiene activos y les nutre de combatientes y de zonas de influencia en las que remplazan al Estado. En efecto, la estrecha visión de las FARC como “narcoterroristas” carentes de ideología y apoyo popular oscurece la realidad y limita la efectividad de las políticas. El conflicto es mas complejo y para ponerle fin se requiere de un análisis mas diferenciado (Crisis Group, 2005, 11).

Es necesario enfrentarse al hecho de que las guerrillas siguen actuando en consonancia al interés por tomarse el poder, objetivo que consideran viable a largo plazo. Hay que enfrentar también el hecho de que cuentan con apoyos, si bien escasos, significativos en cuanto denotan una cierta legitimidad de la oposición al sistema de gobierno. “Ignorar que sus militantes o en todo caso sus dirigentes se autodefinen como revolucionarios y que esto solo hecho importa por que la idea que cada quien tiene de si mismo “verdadera o falsa, justa o injusta” influye en forma decisiva sobre sus acciones” (PNUD, 2003, 41), es ignorar así mismo que el conflicto a resistido a tres diferentes modelos discursivos de las prioridades de seguridad.

Conclusiones

En Colombia hay un conflicto armado desde hace 41 años en el que se han enfrentado diversos grupos guerrilleros contra el Estado y al que mas recientemente se han unido grupos paramilitares opuestos a las

guerrillas. Si bien el conflicto actual nace en plena guerra fría y la ideología comunista jugó un importante papel en la conformación y evolución de los grupos guerrilleros, las causas objetivas del conflicto recaen en factores propios de la estructura política, social y económica colombiana. Mas exactamente en la debilidad del Estado nación incapaz de ejercer poder real sobre la totalidad de un territorio en el que una amplia proporción de la población vive en la marginalidad económica y social y en el que las élites son incapaces de gobernar el Estado.

Las élites que ven el conflicto como algo ajeno a su realidad, han enfrentado el conflicto sin afrontarlo, valiéndose de las estrategias de seguridad internacionales de los EEUU. Desde los primeros años de la violencia interpartidista se identificó el problema en la penetración de las ideologías comunistas, pese a que la violencia era entre seguidores de los partidos tradicionales. Al configurarse los grupos guerrilleros actuales se aplicó con mayor intensidad la política anticomunista, sin dejar lugar a una comprensión del conflicto a partir de sus causas objetivas.

La entrada de los fondos provenientes del narcotráfico degradó el conflicto al entrar en la escena los poderes emergentes provenientes de los carteles del narcotráfico que abrieron una confrontación con las guerrillas. La estrategia de contención del tráfico de drogas a partir del combate de la oferta, no equilibra los esfuerzos entre países productores y consumidores y agudiza los problemas de la población campesina abocada al cultivo de narcóticos ante las ingentes dificultades económicas.

Al usar los discursos basados en prioridades de seguridad internacionales la forma en que se enfrenta la problemática colombiana a nivel internacional también ha generado un discurso de comprensión de la realidad colombiana adaptado a esta visión, en la que predomina la amenaza de seguridad, por ello se han privilegiado los esfuerzos en el combate de las drogas y la represión militar de las guerrillas sobre el fortalecimiento de la democracia, de la justicia y el respeto de los DDHH.

Los grupos no estatales en conflicto también han ajustado su acción respondiendo a la priorización de los medios armados sobre los políticos. No por ello puede decirse que los grupos hayan abandonado sus proyectos políticos, que además mantienen vigentes y siguen siendo los reguladores de su accionar. Inclusive en sus discursos se han articulado las amenazas a la seguridad mismas como justificaciones de acción en el caso de la guerrilla achacando al gobierno su responsabilidad sobre estas y en el caso paramilitar adhiriéndose al discurso del gobierno en la condena a las guerrillas.

En los últimos cinco años se ha hecho un paralelo entre la amenaza terrorista internacional y el conflicto colombiano, para lograr coherencia en el discurso se ha negado la existencia del conflicto para reducir las guerrillas a simples terroristas basados en el argumento que dan sus cuestionables acciones en contra de la población y en el argumento de que Colombia es una democracia donde existen causas políticas para dirimir las diferencias. Esta visión desconoce que pese a su preeminencia por las acciones militares, las guerrillas tienen un discurso político y mas aún tienen una base de apoyo social, pequeña, pero que les surte de combatientes y les brinda apoyo logístico. A la dureza de las acciones guerrilleras y paramilitares en contra de la población civil se han unido la contundencia de las acciones de la estrategia de seguridad del gobierno.

Bibliografía

- **CRISIS GROUP (2005)**; Informe Sobre América Latina 14, Colombia: Política Presidencial y Perspectiva de paz; International Crisis Group
- **GARCIA-PEÑA Daniel (2005)**; La Relación de Estado Colombiano con el Fenómeno Paramilitar: por el Esclarecimiento Histórico. Revista Análisis Político 53, 58-76.
- **GILHODES Pierre (1985)**; El 9 de Abril del 48 y su Contexto Internacional. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura; Vol. 13-14, 239-243
- **LEAL BUITRAGO Francisco (2004)**; La seguridad durante el primer año del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez; Revista Análisis Político 50, 86-101.
- **MEDELLÍN Pedro (2005)**; “El Estado fallido”, Opinión en el Tiempo, Julio 5 de 2005
- **MORENO Luis Alberto(2003)**; “Aiding Colombia”, The New York Times, 3 de mayo de 2002.
- **MURILLO Gabriel, VALDIVIESO Yanina (2002)**; El Escalonamiento de la Crisis Política Colombiana; Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universidad Autònoma de Barcelona
- **MURILLO Mario A (2004)**. Colombia y Estados Unidos, Guerra, Inquietud y Desestabilización; Editorial Popular, Madrid
- **OROZCO ABAD Iván (1990)**; Los Diálogos con el Narcotráfico: Historia de la transición fallida de un delincuente común en un delincuente político. Revista Análisis Político 11, 37-74

- **ORTIZ D. Román (2005)**; La estrategia de seguridad de la administración Uribe: un balance de oportunidades y retos; Real Instituto el Cano; Madrid
- **PALACIOS Marco (1995)**, Entre la legitimidad y la Violencia, Colombia 1875 –Editorial Norma, Bogotá
- **PECAUT Daniel (1991)**; Colombia: Violencia y Democracia Revista Análisis Político 13, 41-58
- **PECAUT Daniel (2004)**; Tradición Liberal, Autoridad y Autoritarismo, Revista Política Vol. 42, Balance de las Democracias en América Latina: Incertidumbres y procesos de consolidación, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, disponible en: www.inap.uchile.cl
- **PIZARRO LEON GOMEZ Eduardo (2005)**; La Cuadratura del Circulo; El Tiempo, Opinión, junio 6 de 2005
- **PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2004)**, Informe Nacional de Desarrollo humano 2003 “el Conflicto Callejón con Salida”, Bogotá.
- **RAMIREZ Socorro (2004)**; Intervención en Conflictos Internos el Caso Colombiano 1994 – 2003; Universidad Nacional De Colombia Sede Bogotá, Colección Sede.
- **RAMIREZ TOBON William (1998)**; Estado, violencia, y democracia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia y tercer Mundo Editores.
- **REINARES Fernando; WALDMAN Peter (compiladores) (1999)**; Sociedades en Guerra Civil. Conflictos Violentos de Europa y América Latina; Paidós, Barcelona.
- **RESTREPO M. Luis Alberto (1990)**; Estrategia Norteamericana de Seguridad y Tráfico de Drogas; en Análisis Político 11, 24-74
- **RESTREPO Luis Carlos (2005)**; ¿Conflicto Armado o amenaza Terrorista”; en Revista Semana 1192
- **REYES POSADA Alejandro (1983)**; La Coyuntura de las guerras y la nueva estrategia de seguridad. Revista Análisis Político 18, 60-72
- **RANGEL Alfredo (1997)**; Las FARC-EP, Una mirada actual; Documento de trabajo 3 CEDE Universidad de los Andes, Bogota.
- **REVISTA SEMANA (2005)**; Las cuentas de las FARC; Semana Digital, Revista Semana, Abril 3 de 2005 Colombia. Disponible en: <http://www.revistasemana.com.co>
- **ROSIN Eileen, YOUNGERS Coletta A. (Editoras) (2004)**; Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy, Executive Summary. Washington Office on Latin America
- **TICKNER. Arlene (coordinadora), Grupo de trabajo Estados Unidos (2004)**, Colombia y Estados Unidos desafíos de una alianza (policy paper 6). Colombia Internacional. disponible en: www.colombiainternacional.org
- **TOURAINÉ Alain (1989)**; América Latina Política y Sociedad. Editorial Espasa Madrid.
- **TOVAR PINZON Hermes (1993)**; La coca y las economías exportadoras en América Latina: El paradigma colombiano; Análisis Político 18, 4-37
- **VALENCIA León (2002)**; Adiós a la Política Bienvenida la Guerra, Secretos de un Malogrado Proceso de Paz; Intermedio Editores, Circulo de Lectores, Bogotá.

Noticias

- “Entender para cambiar las raíces locales del conflicto” PNUD, El Tiempo, 8 de Febrero de 2004
- “Debate sobre si hay o no conflicto en Colombia” El Tiempo, Octubre 13 de 2004
- “La Fuerza pública ingresaría a los denominados territorios de paz, anuncio el gobierno” El Tiempo, marzo 9 de 2005
- “Proceso Tortuoso, Resultado Confuso” El Tiempo, Editorial; Abril 11 de 2005
- “El gobierno busca sacar del lenguaje diplomático el termino conflicto armado” El Tiempo, Junio 13 de 2005